

## **La responsabilidad del intelectual ante las nuevas políticas públicas<sup>1</sup>**

**José Luis Coraggio<sup>2</sup>**

El tema que nos convoca a este panel es “los escenarios alternativos ante el derrumbe del modelo neoliberal”. Yo quisiera empezar problematizando el tema mismo, para repensarlo juntos. Comenzando por el final, por el “derrumbe” del neoliberalismo. No cabe ninguna duda que el Consenso de Washington no está legitimado como estaba en algún momento. No cabe duda que hay experiencias claras en América Latina de que fue una propuesta destructiva para el mundo y particularmente para esta parte del mundo, sobre todo por los responsables nacionales que administraron lo público desde el 76 y particularmente en los 90.

Desde ese punto de vista, creo que el neoliberalismo sí está teniendo problemas para sostenerse como paradigma hegemónico, pero no se lo ve tan derrumbado. Se sigue reproduciendo, a través de las relaciones internacionales de poder, de las asesorías y condicionalidades que siguen dando los organismos internacionales, y que no han cambiado de signo ideológico aunque cambien de consigna discursiva. El Banco Mundial inició la década del 90 con la consigna de “el alivio a la pobreza”. Ahora puede estar cambiando sus consignas cada tres años o cada seis meses y autodenominarse, por ejemplo “Banco del Conocimiento”, pero el corazón de sus “expertos” es neoliberal, es una institución que actúa como intelectual orgánico de un proyecto neo-conservador para transformar el mundo en beneficio de elites minúsculas, excluyendo a las mayorías de aquella promesa liberal de la mejoría intergeneracional de la calidad de vida (o al menos de consumo material). Si ese proyecto puede imponerse por la hegemonía –conjugando presiones y argumentos incompletos de racionalidad instrumental- lo hará, en organismos como las NNUU o la OMC. Pero si cada vez se le hace más difícil –como se advierte por su reticencia a admitir las cortes de justicia internacionales- va a pretender hacerlo por la fuerza. Ya estamos viendo el despliegue de la fuerza militar en el mundo en nombre de la libertad y en nombre del mercado libre.

Pero además debe preocuparnos el pequeño neoliberal que llevamos adentro. Durante mucho tiempo nuestra ciudadanía, nuestros intelectuales y nuestras instituciones han sido sometidos a una propuesta que vino con mucha fuerza militar y mediática, con muchos recursos (la entrada de capitales para adquirir a precio reglado nuestras empresas públicas o incluso las privadas, la deuda fácil y facilitada por los de afuera y los de adentro), y con mucha violencia –metiendo el miedo a la represión, a la impunidad, a la hiperinflación, al desempleo, y ahora a la continuidad de acceso a un subsidio- y no podemos pensar que de la noche a la mañana, porque hubo una crisis social evidente,

---

<sup>1</sup> Versión revisada de la exposición realizada en el panel “Escenarios alternativos ante el derrumbe del modelo neoliberal” en el Foro Federal de Investigadores y Docentes: “La Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local”, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Políticas Sociales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía social “Manos a la Obra”, 19 de noviembre de 2003

<sup>2</sup> Economista, ex Rector de la Universidad de General Sarmiento y actual Director Académico de la Maestría de Economía Social de dicha universidad.

puebladas o cacerolazos, desaparecieron esa cultura y ese sentido común que fueran una construcción expresa de estas décadas de ofensiva conservadora. El sentido común legitimador del neoliberalismo reaparece a cada rato. Incluso cuando parece que estamos discutiendo cosas que son absolutamente progresistas.

Por ejemplo, cada vez que le exigimos al Estado que sea eficiente y no terminamos de aclarar qué quiere decir “eficiente”. Porque si se pretende que sea eficiente según la impronta de una empresa capitalista capaz de competir en los mercados reales, implica que cumpla metas cuantitativas al menor costo fiscal posible y con el mayor rédito político posible para el partido de turno en el gobierno. Y no garantiza de ninguna manera la máxima calidad de esas metas (educación, salud, nutrición, seguridad, empleo, etc.).

Por ejemplo, cuando recordamos -como hizo Tangelson al comienzo-, que los organismos internacionales plantean la meta de que en el año 2015 la tasa de indigencia baje al 50%. Esa es la meta miserable (ni siquiera se refiere a la pobreza ni al empleo) que se propone a nuestros gobiernos que ponen su firma al pie. Solamente un pensamiento organizado desde la lógica del mercado y de la acumulación puede tener tanta dificultad para pensar otros escenarios de desarrollo social. Ese pensamiento es tan descaradamente “realista”, que incluso nos dice: “y aún esa meta es imposible aunque haya un crecimiento difícil de conseguir”. Porque a algunos países les llevaría lograrla no hasta el 2015 sino ochenta años con el sistema actual. A otros cuarenta. Esto lo dicen los mismos organismos internacionales. Y entonces empiezan a cambiar su discurso y hablan del “empleo decente” (para los que puedan tenerlo) o de hacer participar en la legitimidad de esa imposibilidad a una sociedad civil hecha a su medida, como hacen el Banco Mundial o la OEA con sus convocatorias. O bien indican –en sus versiones más sensibles- que sólo se puede lograr esa meta redistribuyendo ya el ingreso (apenas para lograr esa meta), ignorando que no alcanza ya con redistribuir el ingreso anual, que hay que revisar la distribución de los activos acumulados en manos privadas y en otras sociedades (como los bonos de la deuda externa, que no deberían ser legitimados por mecanismos de canje por deuda social).

Hay cambios de discurso pero, en el fondo, el discurso de las políticas públicas todavía es definido dentro de una correlación de poder que está muy lejos de haberse derrumbado. Y que incluso aún pugna por justificar el estado de la cuestión social mediante el discurso científico-ideológico. Nos tenemos que preguntar, a la luz de los consejos del FMI, el BM, el BID y la serie de Ministros de Economía que tuvimos en esas tres décadas: ¿Qué teoría económica permite errar tan sistemáticamente sus previsiones y se resiste a admitir la prueba de la empiria? Es la teoría económica neoclásica, que constituye el núcleo duro del neoliberalismo, desde el punto de vista teórico e ideológico, y que es lo que se enseña en nuestras universidades públicas, finalmente y a pesar de las heterodoxias admitidas, como “la ciencia económica”. En muy pocos lugares se enseña otra cosa. Puede ser en cátedras paralelas o perdidos en los pasillos. Y, debemos decir en esta convocatoria a investigadores de universidades públicas, que no hemos visto que la universidad argentina haga

su autocrítica y acepte que ha estado enseñando la teoría económica que ayudaba a justificar todas estas políticas.

El sentido común legitimador del neoliberalismo está presente también cuando tendemos a reducir la economía social a distribución de dinero para generar microemprendedores. Y a la vez le reclamamos a los microemprendimientos que van a recibir crédito que sean sostenibles y no pretendan ser subsidiados. Hay que discutir a fondo qué sostenimiento y que es “subsidio”. Porque podríamos ver, si se corre el velo de la ideología individualista y asumimos una mirada estructural, que los trabajadores argentinos –con o sin empleo- están hoy subsidiando a las empresas y a los grandes elusores y evasores de impuestos que extraen rentas y ganancias de nuestro territorio. Ese subsidio, esa “donación forzosa” de la calidad de vida digna de las mayorías a los más ricos, no aparece como subsidio. Pero sí sería visto como subsidio que aseguremos que el ahorro de los trabajadores les vuelve como crédito cuyos costos cubre el Estado cobrando impuestos a las ganancias especulativas. Se dice que no es viable el subsidio (este subsidio) por el realismo de mercado.

¿De qué mercado? El mercado real que experimentamos hoy, y sus precios, son una construcción que tiene detrás no sólo mecanismos ciegos, sino empresas y gobiernos responsables, que reproducen relaciones de poder a favor de los grupos más concentrados. Pero desde el punto de vista histórico y político, no hay “el mercado”. Hubo, hay y habrá muchos mercados posibles. Así, se nos quiere seguir imponiendo un mercado donde el concepto de precio justo no tiene cabida. Pero si vamos a impulsar una economía social debemos poder pensar en una red solidaria de intercambios donde el concepto de precio justo es fundamental, es un problema y por tanto un tema a debatir y decidir democráticamente. Todo menos algo dado por la naturaleza de “la economía”.

El micro crédito aparece hoy como la salvación, como la pomada mágica que va a hacer que todo el mundo tenga acceso al crédito, con la única condición de pagar capital más costos e intereses. Y, agotada la teta del Estado prestatario de nuestros propios ahorros canalizados a través de los bancos, se comienza a descubrir que el pobre es buen pagador (sobre todo las mujeres) y que, por lo tanto, si se organiza con operadores (ONGs en muchos casos) de bajo costo, el microcrédito puede ser un negocio para el gran capital, así como Mc Donalds descubrió que vender sandwiches en cada barrio era un negocio global, o Carrefour que lo era la venta al por menor en cada barrio de nuestro sistema urbano.

En esto tenemos que estar vigilantes de la implementación de las políticas que se proponen como innovadoras porque van a pasar del asistencialismo a la promoción de la actividad productiva autogestionada. Por ejemplo, si vemos la economía social como una economía de pobres recursos para pobres, bien podríamos estar creando los nichos de mercado para finalmente terminar contribuyendo al negocio global del microcrédito. Esto no quiere decir que el crédito no sea importante, pero las organizaciones sociales y políticas tienen que vigilar el uso del ahorro popular y ver que se canalice para construir otras relaciones sociales, otra economía, otra sociedad más justa, y no que siga

contribuyendo a la acumulación de riqueza en unas pocas manos, aquí y en el Norte.

En la misma línea, se ha considerado que los “planes de jefas y jefes” sean pagados no por cheque (o como se están pagando ahora), sino por una tarjeta plástica de débito. Y se arguye que esa propuesta tiene como uno de sus objetivos acabar con el clientelismo. Que yo sepa, ningún artificio tecnológico va a acabar con los sistemas que acumulan poderes personales o partidarios a través de la manipulación de las necesidades de la gente. Por otro lado, lo que esa tarjeta sí garantizaría es que toda esa masa de dinero pase por los bancos, dándoles más ganancias. Además, aseguraría que cada “beneficiario” aislado tenga que pasarla por el aparatito de débito que tienen muy pocos comercios, lo que beneficiaría a las grandes cadenas de hipermercados y consolidaría la fragmentación del poder de compra de los trabajadores. Si la nueva política se plantea promover el desarrollo desde abajo, lo que implica revitalizar y articular circuitos económicos locales, esa mera decisión tecnológica lo bloquearía y aumentaría las filtraciones de ingreso y de ganancias fuera del ámbito local.

No creo que quien lo proponga tenga esta intención tan compleja, pero el problema es que estamos tan inmersos en una manera de pensar el mundo, qué es lo bueno, qué es el mercado, etc., y de justificar pragmáticamente negociaciones con el poder más concentrado, que necesitamos con urgencia no sólo responder a la convocatoria que se nos hace en este foro como técnicos y profesionales en problemas instrumentales o como difusores, sino para cumplir un papel fundamental que hemos abandonado y es el de ser intelectuales. No sé si orgánicos, como aquí se dijo en la presentación, pero por lo menos críticos desde la perspectiva de las mayorías. Tenemos que pasar por el tamiz de la crítica todas las propuestas del Estado y sobre todo las prácticas, incluyendo las nuestras: ¿Cómo formamos nuestros profesionales? ¿Para qué los formamos? ¿Qué destinatario tienen las investigaciones que hacemos?

Creo que los enunciados de las nuevas políticas socioeconómicas van en la dirección correcta, pero hace falta una gran inversión planificada de recursos complejos: crédito, conocimientos y métodos, información pertinente, tierra, bienes públicos en general. Y hay que incidir sobre las políticas económicas y tecnológicas en general, cuidando el patrimonio nacional –las capacidades de nuestro pueblo y las de nuestros ecosistemas- que tanto ha sido expoliado en estas tres salvajes décadas. No podemos renunciar a la meta de crecer, de aumentar el producto material y el excedente. Pero si queremos construir una economía social y difundir procesos de desarrollo locales, no podemos aceptar que ese excedente siga siendo apropiado por unas pocas manos privadas y, además, predominantemente extranjeras. Y si sólo distribuimos dinero marginal mientras sigue el megasaqueo y esperamos que la libre iniciativa procesada por el mercado individualista y competitivo va a generar otra economía y otra sociedad estaremos equivocados.

La economía social posible no es un mercado de empresas en chiquito, con la actividad difuminada y por tanto supuestamente democrático. Es una constelación de otras formas, es un sistema alternativo para priorizar y

satisfacer las necesidades de todos, generando riqueza de modo que la misma quede directamente en manos de los trabajadores. Pudiendo estar de acuerdo con el discurso filosófico de las nuevas políticas, aún falta mucho para que sea una propuesta político-técnica eficaz y políticamente viable. En este sentido, tenemos una responsabilidad y debemos tener presente que las variantes de escenarios que podamos pensar serán todas de lucha, de confrontación entre un proyecto popular aún por articular y el proyecto conservador que lleva medio siglo de gestación y de acción y que ha calado hondo en nuestras instituciones.

Para avanzar con la fuerza necesaria no podremos esperar a los tiempos académicos, ni tampoco a que se constituyan por decantación los nuevos sujetos colectivos de la nueva economía, sino que hay que involucrar, desafiar y resignificar a todos los actores colectivos que pretenden representar o estar al servicio de las clases trabajadoras y de un proyecto nacional y latinoamericano. Para estar a la altura de ese desafío, las Universidades e Institutos Científicos, como actores públicos responsables, deben transformarse radicalmente. Esto es algo que difícilmente lograremos si no se abren las cajas negras, si el corporativismo en sus diversas variantes no cede ante necesidades sociales que trascienden la mera reproducción institucional y si no cambian en paralelo con el proceso de cambio de la sociedad.